



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 04458-2013-PA/TC

JUNÍN

DARÍO QUINTO GUERRA

## SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 13 días del mes de julio de 2015, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Miranda Canales, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia

### ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Darío Quinto Guerra contra la resolución de fojas 149, de fecha 11 de junio de 2013, expedida por la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, que declaró infundada la demanda de autos.

### ANTECEDENTES

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Solicita que se declare inaplicable la Resolución 681-2006-GO.DP/ONP, de fecha 12 de abril de 2006, mediante la cual se suspendió el pago de su pensión de invalidez, y que, en consecuencia, se le restituya dicha pensión.

La emplazada contesta la demanda, expresando que el demandante no ha cumplido con someterse a una nueva evaluación médica y por ello concluye que no padece de invalidez.

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 23 de enero de 2013, declara fundada la demanda argumentando que el actor cumple los requisitos legales pertinentes para acceder a la pensión solicitada.

La Sala superior competente revoca la apelada y, reformándola, declara infundada la demanda, por estimar que el certificado médico expedido en el año 2011 no resulta idóneo.

### FUNDAMENTOS

#### Delimitación del petitorio

1. El recurrente interpone demanda de amparo contra la ONP, con el objeto de que se declare inaplicable la Resolución 681-2006-GO.DP/ONP, que dispone suspender a partir del mes de abril de 2006 el pago de la pensión de invalidez que se le otorgó



## TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 04458-2013-PA/TC

JUNÍN

DARÍO QUINTO GUERRA

por Resolución 30034-2005-ONP/DC/DL19990, y que la entidad demandada le restituya su pensión de jubilación. Considera que la citada resolución vulnera su derecho constitucional al debido procedimiento administrativo, así como su derecho fundamental a la pensión, toda vez que ordena suspender el pago de la pensión de invalidez que venía percibiendo en virtud de la Resolución 30034-2005-ONP/DC/DL19990.

2. En atención a que, en el fundamento 107 de la STC 00050-2004-AI/TC y otros acumulados, se reconoce que el derecho a no ser privado arbitrariamente de la pensión constituye un elemento del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la pensión, el cual encuentra protección a través del proceso de amparo, de conformidad con los supuestos de procedencia establecidos en reiterada jurisprudencia de este Tribunal, corresponde verificar si la resolución que ordena la suspensión del pago de pensión del recurrente ha respetado el derecho al debido procedimiento administrativo, en el que se encuentra comprendido el derecho a una debida motivación.
3. Asimismo, es menester verificar si se ha afectado el derecho a la pensión por las restricciones temporales a su ejercicio, como ocurre en el caso *sub examine*, a efectos de evitar arbitrariedades en la intervención de este derecho.

### Análisis de la controversia

4. Previamente, si bien el demandante solicita que se le restituya su pensión de invalidez, la cual fue suspendida por no haberse presentado a evaluación médica, es necesario determinar fehacientemente su estado actual de salud. Por ello, corresponde efectuar la evaluación del caso concreto considerando, además, que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir pronunciamiento.
5. Conviene entonces tener presente que el artículo 24, inciso a, del Decreto Ley 19990 establece que se considera inválido *"Al asegurado que se encuentra en incapacidad física o mental prolongada o presumida permanente, que le impide ganar más de la tercera parte de la remuneración o ingreso asegurable que percibiría otro trabajador de la misma categoría, en un trabajo igual o similar en la misma región"*.
6. De la Resolución 30034-2005-ONP/DC/DL 19990, de fecha 11 de abril de 2005 (f. 9), se aprecia que al demandante se le otorgó pensión de invalidez a partir del 30 de junio de 1988, porque, según el Certificado Médico de Invalidez de fecha 1 de



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 04458-2013-PA/TC

JUNÍN

DARÍO QUINTO GUERRA

diciembre de 2004, emitido por el Centro de Salud San Jerónimo del Ministerio de Salud, su incapacidad era de naturaleza permanente.

7. Consta de la Resolución 00681-2006-GO.DP/ONP, de fecha 12 de abril de 2006 (f. 10), que la Administración suspendió el pago de la pensión del actor hasta que aceptara ser sometido a la comprobación de su estado de invalidez.
8. La ONP resolvió suspender el pago de la pensión de invalidez, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Decreto Ley 19990, y en ejercicio de las facultades que le han sido otorgadas por el artículo 3.14 de la Ley 28532, que establecen, respectivamente, la facultad de fiscalización y la suspensión de pago cuando el asegurado o pensionista no acuda a las evaluaciones médicas que se le programen.
9. Respecto al cuestionamiento de la comprobación periódica del estado de invalidez, el segundo párrafo del artículo 26 del Decreto Ley 19990 señala que, en caso de enfermedad terminal o irreversible, no se exigirá dicha comprobación periódica. Sin embargo, dicho supuesto únicamente excluye la comprobación periódica, que en esencia está regulada para la incapacidad de carácter temporal, mas no la comprobación o fiscalización posterior que la ONP realice en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 3.14 de la Ley 28532 y el artículo 32.1 de la Ley 27444. Por esta razón, el hecho de que la emplazada haya solicitado al demandante someterse a una nueva evaluación de su estado de salud no constituye una afectación de su derecho a la pensión.
10. Dado que el demandante no acudió a la evaluación médica, la suspensión de pago de la pensión no resulta una decisión irrazonable de la entidad gestora. Más bien, constituye la consecuencia prevista legalmente por el incumplimiento del pensionista de una exigencia de carácter sustancial para la percepción de la pensión, situación que no implica una violación del derecho a la pensión.
11. Consecuentemente, podría concluirse que no se ha vulnerado el derecho del demandante al suspenderle el pago de su pensión, por lo que correspondería desestimar la demanda en el extremo referido a que se declare inaplicable la Resolución 681-2006-GO.DP/ONP.
12. No obstante lo dicho, esta Sala no puede dejar de advertir que en autos obra la Historia Clínica N.º 1445671 (ff. 89 - 107), y el Certificado Médico expedido por la Comisión Médica Calificadora de la Incapacidad del Hospital Nacional Daniel A. Carrión del Callao, de fecha 9 de setiembre de 2011 (f. 81), expedido por la



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 04458-2013-PA/TC

JUNÍN

DARÍO QUINTO GUERRA

Comisión Médica Calificadora de la Incapacidad del Ministerio de Salud, en el que se indica que el recurrente padece de hipoacusia conductiva y neurosensorial y poliartrosis parcial y permanente, con 52 % de menoscabo global.

13. De otro lado, y ante el incumplimiento de presentarse a la reevaluación médica en su oportunidad, no es posible dejar de aplicar la sanción prevista en el artículo 35 del Decreto Ley 19990. Sin embargo, el demandante ha manifestado haberse sometido a la evaluación médica recién en el año 2011 (f. 5), solicitando su reactivación con fecha 28 de setiembre de 2011 (f. 13). Por ende, debe ordenarse la reactivación de la pensión desde el 9 de setiembre de 2011, fecha en la cual la Comisión Médica dictamina el estado de invalidez del recurrente.
14. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 55 del Código Procesal Constitucional, debe procederse al restablecimiento del derecho fundamental a la pensión consagrado en el artículo 11 de la Constitución, y ordenar que la ONP expida la resolución administrativa que permita el acceso del demandante a la pensión de invalidez que le corresponde por reunir los requisitos previstos legalmente, más el pago de pensiones devengadas, intereses legales y los costos procesales.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

**HA RESUELTO**

1. Declarar **FUNDADA** en parte la demanda de amparo porque se ha acreditado la vulneración del derecho a la pensión.
2. Ordenar que la ONP reactive la pensión de invalidez del actor desde el 9 de setiembre de 2011, conforme a los fundamentos de la presente sentencia.
3. Declarar **INFUNDADO** el extremo referido a la inaplicación de la Resolución 00681-2006-GO.DP/ONP, de fecha 12 de abril de 2006.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MIRANDA CANALES  
SARDÓN DE TABOADA  
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

Lo que certifico:

OSCAR DÍAZ MUÑOZ  
SECRETARIO RELATOR  
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL